

Electores y partidos

Martes, 20 de junio de 1939

Exiliado de una democracia de la que siento amargamente el eclipse; refugiado en otra de la que observo la salvación como la base del interés solidario de todos los pueblos libres; consciente de la asociación del destino de las instituciones democráticas en el mundo entero; me he fijado una línea precisa para emitir mis opiniones sobre los problemas que se plantean en el seno de las democracias aún sobrevivientes. No doy opinión sobre tales problemas, y aún menos formularé conclusiones apuntándolas: me limitaré a traer los enunciados y los recuerdos de una experiencia interesante, que podrían ser utilizados por otros. Es así como creo combinar y cumplir todos los deberes de simpatía y de circunspección que un exiliado no debe olvidar jamás.

La reforma electoral, en el sentido y con la intención de corregir los graves peligros del escrutinio de lista mayoritaria, se imponía en España como necesidad vital del régimen republicano, tan amenazado por los defectos, que se mostraron mortales, de la Cámara única. Tal reforma parecía el único medio inmediato para establecer el orden legislativo y la continuidad en la acción del gobierno permitiendo, antes de que la modificación llegara, evitar los balanceos —que nosotros los Españoles llamamos «bandazos»— de una opinión excitada y cambiante, falseada por el peor método electoral, yendo y volviendo siempre de la extrema izquierda a la extrema derecha, y por ello por el simple desplazamiento de una minoría de voces que imponía una mayoría aplastante e injustificada de elegidos.

Sin embargo se aportaron siempre los perfeccionamientos teóricos de una proporcionalidad absoluta; y sobre todo se quería respetar en la medida de lo posible la plena libertad de un elector quisquilloso, poco deseoso de someterse ciegamente a unas disciplinas de partido donde sólo podría haber intrigas de pasillos.

Después de haber admitido el derecho del elector para cambiar el orden de los candidatos, e incluso para asociarlos en las propuestas, a pesar de ello, no se apartó la aplicación prevista del voto acumulativo: es decir mucho más

que el voto preferencial, porque hubiera podido reunir el número total de los votos de lista sobre un solo candidato.

Las razones, que algunos de entre nosotros habíamos retenido, eran quizás válidas solamente para el caso español; pero merecen ser recordadas porque afectan a veces a los principios más fundamentales.

Habíamos creído que el cuerpo electoral debía ser efectivamente soberano, al menos durante la jornada electoral. Más tarde, algunos creían que toda ley electoral debe ser hacia el elector una ley de garantías del procedimiento a fin de asegurarle la expresión de su voluntad, pero no una ley de coacción para disminuir el impulso libre de esa voluntad.

En el país donde el porvenir industrial está representado por sus saltos de agua, era fácil hacer una comparación que mostraba el curso y el origen de la energía electoral en el elector; la conducción en los partidos y en los comités, los administradores de fábrica, sin duda necesarios, pero siempre estrechamente interesados y a veces sospechosos. Y la primacía volvía a la fuente donde se debía buscar el origen puro y libre, fuerte y crecido.

Temimos que el elector encontrándose delante de las restricciones de su libertad de elección no las superaría mediante la abstención o con el depósito de papeletas blancas o nulas, vista la fuerza de las pasiones negativas sobre todos los hombres, isin necesidad de que fuesen muy meridionales!

También habíamos reflexionado sobre el hecho –esencial y, sin embargo muy a menudo olvidado– según el cual la decisión eficaz de las consultas electorales es la obra de las masas no encajadas en el seno de los partidos que no quieren aceptar la disciplina de éstos, muy discutida por sus mismos afiliados.

La utilidad principal de una reforma electoral justa, que favorece y asegura una verdadera representación nacional, es afirmar la posición y el papel saludable de los partidos medios. ¡Pues bien! esa tarea es iniciada por el elector lúcido, no fanático, que quiere expresarla, no sintiéndose representado en un grupo y queriendo esbozar, con su papeleta de voto, tipos de alianza, colaboraciones para una obra nacional de gobierno.

Pero hay sobre todo psicologías colectivas muy sometidas en sus ventajas y en sus defectos a una ley de compensación y que aconsejan ser reconocidas legislando. Hay pueblos disciplinados hasta los límites del borreguismo; hay otros, por el contrario, donde la energía individual es a la vez el escollo constante y el remedio salvador. Es necesario –y es quizás la singularidad del caso español– tener en cuenta la naturaleza casi incorregible de esa gente, y dejar a la acción educadora, en un futuro próximo o lejano, la tarea de corregir los

excesos de la iniciativa sin agotar las fuerzas. Y gente así desea hacer sentir el peso de su elección directa sobre el elegido, y lo desea también por unos impulsos muy diferentes, pero todopoderosos: por el egoísmo, por el orgullo, por el afecto, por la justicia. La fuerza de esos motivos de la voluntad electoral no salvó a los países nórdicos, por muy diferentes que fuesen de España.

Es el ejemplo que ha sido, repetidas veces recordado, con su gran autoridad, por el eminente colaborador de *L'Ère Nouvelle* y miembro del Instituto de Francia, Emile Borel.